

Expediente GCASU 2019-1-FAR

Suministro de Albúmina Humana 5% Vial 500 ML en el HUPH

AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COMUNIDAD DE MADRID

D. JOAO COELHO, mayor de edad, casado, de nacionalidad portuguesa, con pasaporte nº M789444 y NIE Y-3268252-N, y D. JOSÉ SANGUINO CANTALAPIEDRA, mayor de edad, casado, de nacionalidad española, con DNI 796702-M, con domicilio ambos a efecto de notificaciones en Avda. Castilla nº 2 - Parque Empresarial de San Fernando. Edif. Dublin – 2ª Planta, en San Fernando de Henares (28830 Madrid), ambos en nombre y representación de **OCTAPHARMA, S.A.**, según se acredita mediante escritura de elevación a público de acuerdos sociales de fecha 18 de mayo de 2018, otorgada ante el Notario de Madrid D. Antonio Luis Reina Gutierrez, al nº 3.817 de su Protocolo (Documento nº 1), ante ese Tribunal comparecemos y, como mejor proceda en Derecho, DECIMOS:

Que el pasado día 11 de julio de 2019 fue notificada a nuestra representada “Resolución de adjudicación del contrato” en el expediente arriba referenciado, de la que se acompaña copia a efectos identificativos (Documento nº 2).

Que, como consecuencia de ello, nuestra mandante tomó conocimiento de que en fecha 6 de junio de 2019 se había celebrado una mesa de contratación en la que se concedió a OCTAPHARMA, S.A. y a CSL BEHRING, S.A., sin recibir notificación alguna, un plazo de tres días naturales para subsanar unos defectos u omisiones hallados en la documentación administrativa entregada.

Y OCTAPHARMA, S.A. también pudo conocer que el 13 de junio posterior, sin haber sido notificada tampoco a pesar de su alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, en otra mesa celebrada entonces, se había acordado su exclusión

del procedimiento al no haber aportado la documentación que se dice fue requerida.

Que, entendiendo que la Resolución de la que se acompaña copia, y las precedentes reseñadas, no resultan ajustadas a Derecho, resultando ser gravemente perjudiciales para los derechos e intereses de nuestra mandante, es por lo que, por medio de este escrito, se interpone, en tiempo y forma, **RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN** contra las mismas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los plazos previstos en el artículo 50 de dicha Ley 9/2017. Todo ello con fundamento en los siguientes,

MOTIVOS DE RECURSO

PRIMERO.- FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL TRÁMITE POR EL QUE LA ADMINISTRACIÓN PRETENDE LA EXCLUSIÓN DE OCTAPHARMA, S.A., LO QUE PRODUCE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA, O SUBSIDIARIAMENTE SU ANULABILIDAD (ARTS. 39 Y 40 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, Y ARTS.47 Y 48 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE).

La Resolución recurrida se fundamenta en que OCTAPHARMA, S.A. no aportó la documentación requerida en el plazo de tres días naturales desde su publicación en el Perfil del Contratante que le fue concedido en la mesa de contratación celebrada el 6 de junio de 2019.

En esa mesa de contratación se procedió a la apertura de documentación administrativa a través de la plataforma Licit@ y, según se refiere en la Resolución combatida, se detectaron errores u omisiones en la documentación aportada no solo por OCTAPHARMA,

S.A. sino también por CSL BEHRING, S.A., y se les requirió a ambas para su subsanación, trámite que, de forma llamativa, no fue evacuado por ninguno de los dos licitadores.

Resulta que la mesa de contratación se limitó a publicar el trámite conferido, con un plazo tan perentorio (3 días naturales), en el Perfil del Contratante, pero nada más.

Por cierto, no es admisible que el plazo fuera en días naturales, en contra de lo contemplado tanto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Nuestra representada, OCTAPHARMA, S.A., conforme a lo establecido en el artículo 140.1, letra a), 4º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, designó una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, dirección que fue habilitada según lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la referida Ley. Así se recoge en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en su cláusula 10:

Para la práctica de las notificaciones, el órgano de contratación utilizará el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Mediante este servicio, como es sabido, se reciben las notificaciones que realiza la Administración de la Comunidad de Madrid, por medios electrónicos, habiendo cumplido OCTAPHARMA, S.A. con los requisitos para la utilización del Servicio, es decir:

- Identificarse con los medios electrónicos habilitados por la Comunidad de Madrid.
- Estar dada de Alta en el Sistema de Notificaciones Electrónica de la Comunidad de Madrid.

Prueba concluyente de ello es que la notificación de la resolución de adjudicación sí que se

produjo mediante una notificación SMS y un correo electrónico a la dirección de correo electrónico habilitada por nuestra representada desde notificaciones@madrid.org

En definitiva, la Resolución impugnada que se adjunta, y también las antecedentes indicadas, vulneran de plano el precepto reseñado, artículo 140.1, letra a), 4º, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por falta de aplicación.

SEGUNDO.- FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LO QUE IMPLICA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, O SUBSIDIARIAMENTE SU ANULABILIDAD (ARTS. 39 Y 40 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, Y ARTS. 47 Y 48 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE).

En efecto, la Resolución impugnada adolece de motivación mínima, exigida por el artículo 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que permita conocer la razón de la adjudicación del contrato a GRIFOLS MOVACO, S.A., no siendo suficiente en absoluto que fuera el único de los tres licitadores al que no se le requirió la subsanación de documento alguno.

Existe una obligación legal de que la resolución de adjudicación deba ser motivada, debiendo contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá figurar, cuando menos, y en todo caso, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los licitadores.

No constan tampoco informes de valoración emitidos a lo largo del proceso de licitación con criterios que justifiquen la adjudicación acordada.

La motivación es un requisito no sólo de forma sino también de fondo, e indispensable.

En definitiva, la Resolución recurrida adolece de criterios técnicos que cumplimenten una mínima exigencia de motivación de la actuación administrativa, por lo que ello impide el conocimiento por parte de la interesada, mi representada, de la justificación de lo decidido. De este modo, se ha producido indefensión material, real y efectiva (art. 24 CE) que perjudica gravemente al ahora recurrente.

En virtud de cuanto antecede,

SOLICITO A ESE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tramitarlo conforme a Derecho, teniendo por realizadas las consideraciones que en el mismo se contienen y por interpuesto **RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN** contra la "Resolución de adjudicación del contrato" dictada en el Expediente GCASU 2019-1-FAR - Suministro de Albúmina Humana 5% Vial 500 ML en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, resolviendo dejarla sin efecto y, consecuentemente, se declare nula, o subsidiariamente anulable, acordando en definitiva retrotraer el procedimiento para que OCTAPHARMA, S.A. disponga de plazo para poder subsanar ante la mesa de contratación los defectos u omisiones indicados en su sesión celebrada el 6/6/2019, con todos los demás efectos favorables que procedan conforme a Derecho.

OTROSÍ DIGO, que conforme se exige en el artículo 51.1.e) LCSP, indicamos de nuevo cual es la dirección de correo electrónico «habilitada» a la que enviar, de conformidad con la disposición adicional decimoquinta, las comunicaciones y notificaciones»:

.....nuria.lopez@octapharma.com.....

Por ello,

SOLICITO A ESE TRIBUNAL, que tenga por efectuada la indicación legalmente exigida.

Así procede y solicito en Madrid, a diecinueve de julio de dos mil diecinueve.

SANGUINO
CANTALAPIE
DRA JOSE -
00796702M

Firmado digitalmente
por SANGUINO
CANTALAPIEDRA
JOSE - 00796702M
Fecha: 2019.07.22
10:21:57 +02'00'

Firmado por ANTUNES COELHO JOAO CARLOS - Y3268252N el día 22/07/2019 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 13, 1ª PLANTA. 28014 MADRID.